

JUNIO 23, 1986

Precio: 2 intis

Director:

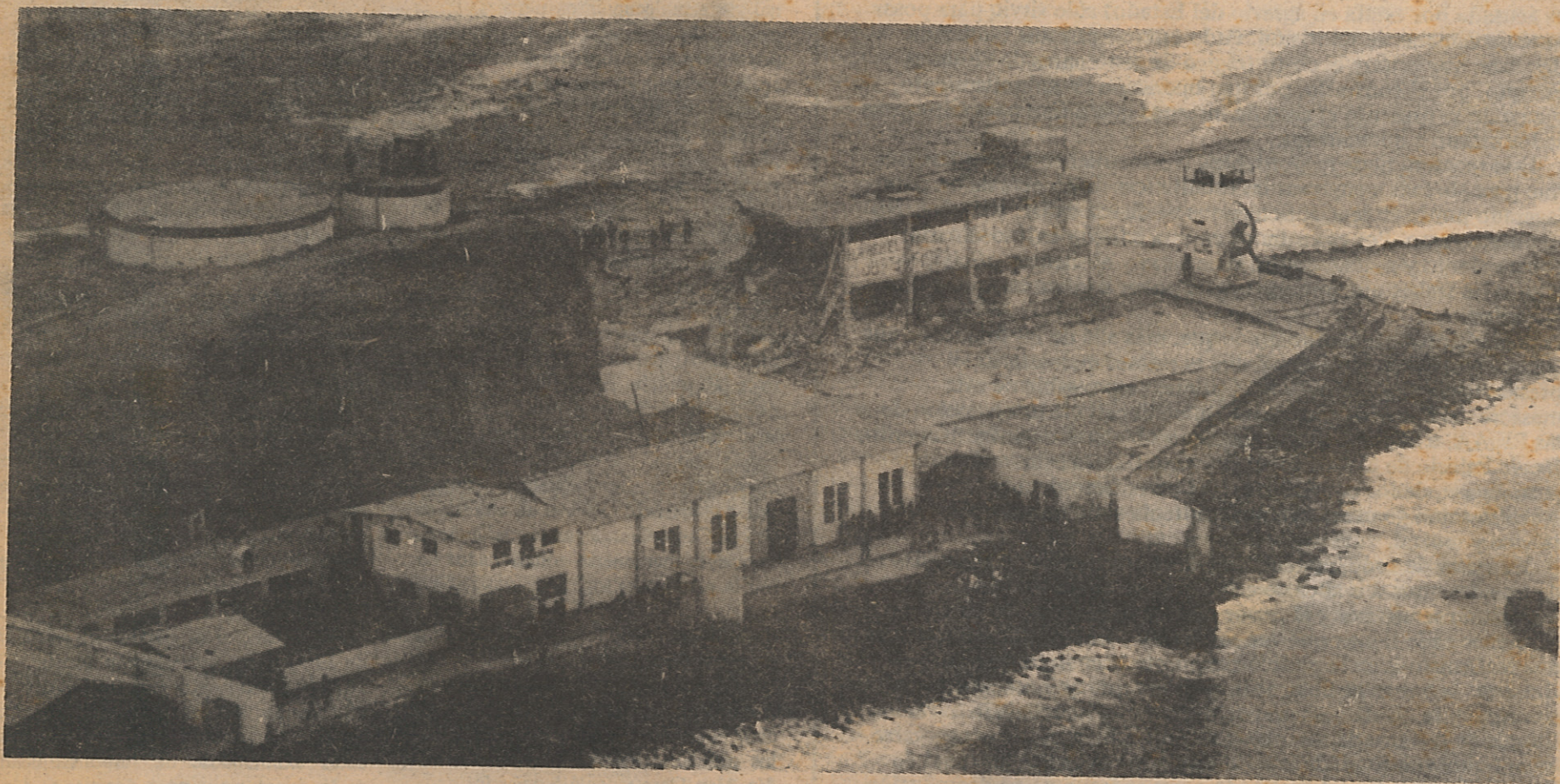
Santiago Pedraglio

**EDICION
EXTRAORDINARIA**

Trágica decisión, Señor Presidente

FUE GENOCIDIO

- "Operación Salvaje" dejó más de 300 muertos
- Decenas de fusilamientos a sangre fría
- Viceministro Mantilla dirigió baño de sangre en El Frontón
- Lurigancho: reclusos quisieron rendirse
- Desde helicópteros: "Pabellón Azul" demolido con rockets



Exclusivo: lo que pasó en los penales



editorial

REPUDIAMOS LA MASACRE

Esta edición extraordinaria de *Amauta* es para nosotros una obligación moral y política. Contra el genocidio en primer lugar, pero también contra la autocensura que complacientemente se ha instalado en los grandes medios de comunicación.

Quién iba a pensar, hasta hace poco, que la opinión pública del país pudiera de nuevo ser conmovida luego de estar asediada diariamente por el violentismo durante más de seis años. Pero así ha sido. El 19 de junio se cometió uno de los más abominables crímenes en masa que registra la historia contemporánea del Perú, sólo comparable en dimensión a la masacre de militantes apristas en las minas de Chan-Chan en 1932. No nos pidan, en momentos así, redactar proclamas de fe antisenderistas, simplemente porque no vienen al caso. Lo que hoy viene al caso es el acto genocida que ha ensangrentado las manos de las más altas esferas oficiales del país.

Los datos del Comando Conjunto hablan de alrededor de 150 muertos. Fueron muchos más, como nuestros lectores podrán apreciar por los testimonios y pruebas que hemos recogido. Tampoco vaya a creerse que se trató de víctimas de una acción de guerra entre dos ejércitos enfrentados. No. Fueron el resultado de la concentración del poder represivo del Estado desatando una orgía de sangre contra centenas de reclusos que en Lurigancho llegaron incluso a pedir la rendición y a soltar a los rehenes tomados horas antes.

No se negoció; ni se dialogó, ni se esperó. La participación de la Comisión de Paz y de los jueces fue, desgraciadamente, ornamental, y la presencia del Fiscal de la Nación (el mismo que es acusado por estafa en agravio del Estado) sólo sirvió para posar ante las cámaras de televisión. Pudo optarse por una táctica de desgaste, que evitara el costo trágico de centenares de víctimas. Se optó, por el contrario, por una operación de aniquilamiento, y cuando se presentó el caso de internos que salían para entregarse se los ultimó a quemarropa.

Esta masacre tiene responsables. No aceptamos ni aceptaremos que pase sin más a engrosar las estadísticas de muerte de un país lacerado por la violencia. Si algunos prefieren callar, allá ellos. No es nuestro caso. Por eso salimos en esta edición extraordinaria, contra viento y marea, contra la censura y el silencio oficial, contra las trabas que impone hoy el poder a quien busque y diga la verdad.

Más aún: nosotros afirmamos que, más allá de las funciones que recaen constitucionalmente sobre el primer mandatario, el presidente de la República es el primer responsable de esta masacre. El Dr. Alan García fue quien decidió la intervención de las FF.AA. e impulsó que se haga con objetivos de aniquilamiento. Desde Palacio de Gobierno, el Dr. Alan García estuvo al tanto, paso a paso, de los operativos, en el paroxismo de una escenificación guerrera que sería ridícula si no hubiera sido trágica y mortal.

Y a pesar de todo, en medio de la consternación, a sabiendas de que llevamos seis años de esta vorágine violentista en que el terrorismo senderista y el terror de Estado han cogido de víctimas a quienes nada tienen que ver con uno u otro; en estos momentos nos reafirmamos en la posición expuesta hace unos días en *Amauta*: la paz es posible. Sólo requiere que quienes creen sinceramente en ella, esa mayoría que no se ha rebajado hasta los límites de la barbarie, sea capaz de unir esfuerzos, de congregarse en una sola voluntad, de suscribir un gran Acuerdo Nacional de Paz con Justicia Social destinado a poner freno a una degradación violentista que hoy cuenta con la abierta complicidad gubernamental.

El país de la encrucijada DEMOCRACIA “SALVAJE” O CON PAZ Y JUSTICIA

En las situaciones límite, en los momentos de mayor tensión, se conoce a las personas y a las instituciones.

En las 48 horas transcurridas entre el miércoles 18 y el jueves 19, el fanatismo de Sendero Luminoso colocó a las principales instituciones y personalidades del país en una situación límite. Desgraciadamente, de muchos lugares, como advirtiera hace ya un siglo Manuel González Prada, saltó otra vez la pus.

En efecto, ya es conocida, y repudiada, la estrategia de Sendero Luminoso. Pero en esas 48 horas fue el Estado: la Presidencia de la República, el Consejo de Ministros, las Fuerzas Armadas los que respondieron a la sangre con más sangre, a la ferocidad con mayor ferocidad, al terrorismo ultraizquierdista con el terrorismo de Estado, abriendo heridas gravísimas en el frágil cuerpo de la patria, que tardarán mucho en cerrarse.

RESPUESTA MILITAR

Aprovechando una huelga del personal de establecimientos penales, en la madrugada del miércoles 19, los internos acusados por terrorismo tomaron en acción coordinada los penales de Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara (mujeres del Callao). Capturaron rehenes y en el caso de El Frontón se apoderaron además de algunas armas.

Uno de los objetivos centrales del amotinamiento era empañar el Congreso de la Internacional Socialista que estaba en vísperas de iniciarse en nuestra capital. Los amotinados calcularon, además, que ante la presencia de delegados de más de 70 países y de periodistas de todo el mundo en Lima, el gobierno dudaría antes de emprender una represión violenta y lograrían, tal vez, arrancar, a cambio de los rehenes, lo que constituía su reivindicación central: evitar el traslado al penal de alta seguridad de Canto Grande, en el cual les sería imposible mantenerse cohesionados como lo estaban en los tres penales tomados.

Pero esta vez SL no calculó la rapidez, y la ferocidad, de la respuesta estatal. “De su propia medicina”, tituló grotescamente un matutino. Pero en realidad, el gobierno exhibió ese día sus fillos más autoritarios. Antes de mediodía Alan García decidió dejar los penales bajo el control de las Fuerzas Armadas. La que bautizaron “Operación Salvaje” estaba en marcha. Un pacto tácito



Alan García asumió directamente la conducción global desde Palacio

to se iba a sellar con sangre entre el gobierno y la “guerra sucia”.

Es cierto que en los centros de reclusión imperaba el desorden y que en El Frontón los internos acusados por terrorismo habían construido un pequeño, patético fortín. Pero por la rapidez y la dimensión de las acciones represivas, parecería que la decisión de proceder a una masacre hubiera estado tomada de antemano, en espera sólo de la ocasión propicia. No es una idea estrambótica que nos viene a la cabeza, un editorial del prestigioso diario norteamericano *The New York Times* acaba de insinuar esta misma, terrible posibilidad.

En todo caso, la visita a los penales de la Comisión de Paz y el Fiscal de la Nación en las primeras horas de la tarde tuvo lugar después de la decisión gubernamental de entregar el control de los centros de reclusión a las FF.AA.

Es necesario destacar, asimismo, que tanto el director de Lurigancho como el de El Frontón, se negaron a aceptar dicha abdicación de la responsabilidad civil, por ser anticonstitucional, y hacia las 4 de la tarde del miércoles firmaron actas eximiéndose de responsabilidad en los sucesos que poco después se desencadenarían.

Para entonces, el viceministro Agustín Mantilla estaba ya en El Frontón,

ENTIERROS CLANDESTINOS

Once cadáveres de los internos asesinados en Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara fueron enterrados clandestinamente en el cementerio municipal de Surquillo, según denuncia presentada por el alcalde de ese distrito limeño, Wilfredo Alvarez, de las filas de Izquierda Unida.

A las dos de la madrugada del sábado, efectivos del ejército llegaron en varios camiones transportando once ataúdes. Después de conminar a los guardianes a que les abran las puertas del camposanto, procedieron a sepultar los restos con celeridad.

Los uniformados colocaron los ataúdes en once nichos del cuartel La

Paz No. 2, colocando en las tapas de cemento los nombres de las víctimas. Ellos son: Luis Lavado, Víctor Villalobos, Máximo de la Cruz, Luis Padilla, José Aranda, Max Cruz, Mabel Chávarry, Beatriz Sarmiento, José Guevara, Jesús Ponce y Genaro Castillo.

De otro lado, se comenta al cierre de esta edición, que igual operativo se habría producido en el cementerio municipal de Chaclacayo, donde, a la misma hora, un camión del ejército violentó la puerta del osario y procedieron a sepultar ocho cadáveres.



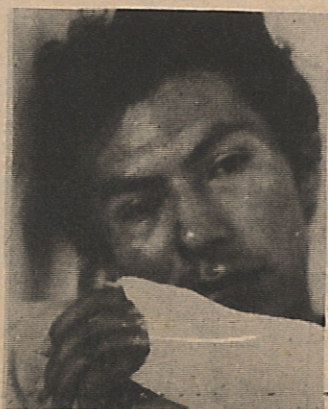
El congreso de la Internacional Socialista en Lima no pudo impedir la tragedia



Los medios de comunicación nacional dieron una lamentable muestra de parametraje

vestido de comando, enviado por el propio Presidente. Allí permaneció hasta el final de los operativos.

No hubo más intentos de evitar el derramamiento de sangre. Al caer la noche en la isla y a la medianoche en Lurigancho, se desencadenaron las acciones militares. Si bien en El Frontón los amotinados resistieron desesperadamente, en Lurigancho propusieron rendirse y soltaron al empleado que tenían de rehén. De nada les valió. Los que salían del Pabellón Industrial fueron asesinados por decenas con disparos en la cabeza.



José Suarez Orihuela, rehén en el penal de Lurigancho: dramático relato (pág. 6)

Para el jueves todo estaba consumado. Al parecer. Las repercusiones de la "Operación Salvaje" se sentirán por mucho tiempo.

Es posible que contando con la inaudita autocensura de los mayores medios de comunicación, el Presidente logre cosechar en un primer momento la adhesión de un significativo sector de la opinión pública, totalmente desinformado. También contribuye a esa adhesión la exacerbación de la violencia terrorista de Sendero Luminoso, que lleva a muchos a buscar tranquilidad a cualquier precio. Pero no tardará en notarse que ese precio es demasiado alto.

Los atentados producidos luego de la "Operación Salvaje", incluyendo una joven destrozada por un mortero casero en un edificio cercano al local donde se celebra el Congreso de la IS y la explosión de un coche-bomba frente a las oficinas de la OXY, así como el asesinato de guardias civiles, prueban que la violencia ejercida por el Estado sólo traerá mayores dosis de violencia, cada vez más descontrolada.

Si bien el "futuro diferente" ofrecido por el APRA aparecía ya desde antes de la "Operación Salvaje" cada vez más lejano y desdibujado, hoy el partido de gobierno ha quedado con las manos tintas en sangre. Su imagen internacional se ha desdibujado dramáticamente. En momentos de cerrar esta edición, un pronunciamiento de la Internacional Socialista tomando distancias e incluso condenando el operativo militar en los penales, se encuentra en debate.

Lo peor es que el APRA aparece cohesionada al rededor de esta política represiva, que suscita el entusiasmo no disimulado de personajes como Elías Laroza, que propició la noche del viernes por Canal 2 el aniquilamiento como "solución final" para la subversión.

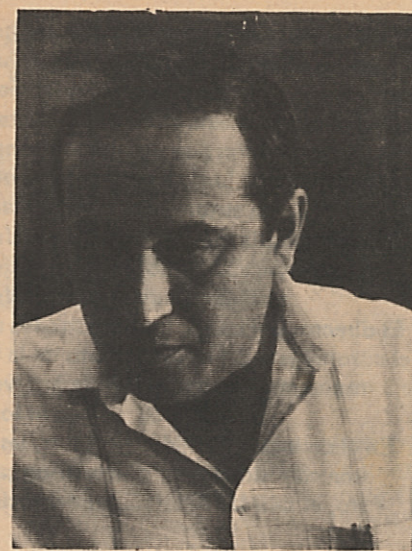
Más aún. El primer comunicado oficial del gobierno insistía en vincular el terrorismo con la protesta sindical, incluyendo sibilamente "movilizaciones callejeras" y refiriéndose a "reclamos salariales" como causas de su decisión de desatar la "Operación Salvaje". ¿Se trata de aplicar también la "solución final" a otros sectores de izquierda? En todo caso, en Puno el oficialismo ha comenzado a inventar en las últimas 48 horas supuestas tomas de tierras. ¿Con qué propósitos?

INSISTIR EN LA PAZ

El Perú vive horas cruciales. Sólo sacando lo mejor de nosotros mismos podremos evitar ser arrastrados por la militarización y el terrorismo. La tragedia de los últimos días ha logrado, felizmente, cohesionar al conjunto de la Izquierda Unida, que en un comunicado firmado por su presidente y por todos los partidos que la integran, ha salvado la dignidad y los principios socialistas de justicia y paz por los cuales luchó históricamente la masa izquierdista. Es hora de reforzar esa unidad y de convocar al conjunto de sectores democráticos del país a actuar contra las fuerzas de la militarización.

La Comisión de Paz, constituida por ciudadanos respetables y de honestidad indiscutible, debe renunciar pues no puede seguir avalando una política anti-constitucional y antihumanista.

La necesidad de un gran Acuerdo Nacional por Paz con Justicia; en Defensa de la Vida, se hace impostergable.



Agustín Mantilla, el siniestro viceministro del Interior, fue el encargado político del genocidio del Frontón.

MANTILLA: SINIESTRO PERSONAJE

Todos los regímenes autoritarios tienen su carnicero. Seres siniestros, sin escrúpulos ni luces. Obsesionados por la violencia y ajenos a todo diálogo. Personajes grises y fieles que se ligan a hombres poderosos para hacer el trabajo sucio.

Si Odría tuvo su Esparza Zañartu, y Perón su López Rega, ¿por qué Alan García no podría tener su Agustín Mantilla? Organizador de bandas paramilitares, con un pasado más delictivo que glorioso Mantilla está decidido a ganarse un lugar en la historia de la infamia.

Un individuo capaz de presenciar y dirigir sin pestañear el asesinato de cientos de presos políticos, ¿cómo es posible que sea hoy hombre importante de un partido que algunas veces recordó a los opresores de entonces el quinto mandamiento: no matar...?

Este domingo, en diarios de la capital, un comunicado firmado por decenas de intelectuales destacados del país y titulado "Unidos por la Vida", recoge los mejores sentimientos de la peruanidad, de Grau generoso en la victoria y heroico en la derrota pero siempre digno.

El APRA y el gobierno debieran reflexionar sobre el camino que transitan. Nopueden haber esperado 60 años para terminar hundiendo al país todavía más en la espiral de violencia y destrucción.

Finalmente, creemos que la Iglesia, por su poder moral y por las posiciones que el Episcopado Peruano ha sostenido tradicionalmente, está llamada a jugar un papel destacadísimo en la búsqueda de una solución civilizada a los problemas nacionales.

No queremos la paz de los cementerios ni la "democracia salvaje" (porque el gobierno ha confundido energía con salvajismo) que hoy se nos ofrece desde el poder. Queremos paz con justicia y esa democracia por la que el pueblo viene luchando desde tiempos inmemoriales y que por respeto a los que nos precedieron y responsabilidad frente a los peruanos que vendrán mañana, tenemos el deber de conquistar.

Lo que sigue es la cronología de los hechos ocurridos entre el miércoles 18 y el jueves 19 en El Frontón. *Amauta* ha reconstruido los hechos recurriendo a diversas fuentes: versiones directas y otros materiales.

De todo esto queda claro que la matanza de los inculcados por terrorismo fue una decisión política que no tomó en cuenta la voluntad de diálogo y negociación de los internos ni los acuerdos a los que éstos habían arribado con las autoridades penitenciarias y judiciales ahí presentes.

Como se detalla más adelante, el motín tuvo como propósito conseguir una serie de reivindicaciones contenidas en un pliego de reclamos, que reproducimos también en esta edición. No hubo pues intención de fuga.

El director del penal, los magistrados que se apersonaron a El Frontón e incluso el coronel jefe del destacamento de la GR estuvieron de acuerdo en determinado momento en no producir la intervención policial para facilitar el diálogo con los internos.

En el diálogo sostenido con éstos, las autoridades aceptaron que se constituya una comisión mixta que se encargaría de buscar solución a las demandas. Pero, al salir las autoridades del recinto donde dialogaron con los detenidos,

el viceministro de Interior, Agustín Mantilla —de quien se dice vestía uniforme de comando de la Marina— les comunicó que el penal quedaba bajo control del Comando Conjunto.

Debe resaltarse que Mantilla conocía de antemano esta decisión adoptada por el Consejo de Ministros realizado ese día. Sin embargo, no la anunció hasta que la Comisión de Paz hubo terminado de dar su mensaje a los amotinados. Eso prueba que el gobierno manipuló la visita obligatoria que hiciera la Comisión de Paz a El Frontón, para pretender demostrar que aparentemente se había agotado todas las gestiones de solución pacífica al conflicto. Por último, los hechos demuestran que la consigna recibida por las tropas fue la de liquidar a los detenidos.

El poder de fuego utilizado por la Marina fue aplastantemente superior al que disponían los senderistas. Estos sólo contaban con tres FAL y una pistola ametralladora arrebatados a los rehenes, y no más de un centenar de tiros, toda vez que las cacerinas de esas armas no tienen más de 20 balas. A esto podríamos agregar, seguramente, diverso tipo de armas caseras.



El Frontón

HECATOMBE PREMEDITADA

Que se trató de un operativo de aniquilamiento premeditado lo demuestra lo ocurrido en El Frontón. Ahí se pudo dialogar; incluso hubo quienes lo intentaron. Pero al final se impuso la orden presidencial: había que acabar con los ocupantes del Pabellón Azul.

En efecto: Se sabe que el propio director del penal, José Rojas Mar, solicitó la presencia del fiscal provincial de turno del Callao y del juez de Ejecución Penal ante la grave situación creada por el amotinamiento y toma de rehenes. Corrían las 15 horas del jueves 18. Con ellos y con el senador Andrés Quintanilla ingresó al patio del Pabellón Azul y logró comunicarse con los delegados de los reclusos. ¿Qué hablaron? Los internos entregaron un pliego de 26 puntos y demandaron la formación de una comisión mixta donde estuvieran autoridades del gobierno, sus abogados y sus familiares.

El director del Penal tomó acta de los reclamos. Había constatado directamente que los rehenes estaban sanos y que sus heridas habían sido curadas por los mismos amotinados. Pensó, por un instante, que era posible evitar un baño de sangre.

Pero la suerte estaba ya echada. Una hora antes había llegado en un helicóptero FAP el viceministro del Interior, Agustín Mantilla, quien hablaba a nombre del presidente de la República. Desconoció a las autoridades judiciales y desconoció la autoridad del propio director del Penal. No quiso saber nada de los intentos de negociación. Fue terminante: por orden del presidente, el Penal pasaba a poder del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Horas más tarde empezaba la masacre.

MANTILLA ENCABEZO EL ATAQUE

MIÉRCOLES 18

6.10 a.m. Internos del Pabellón Azul toman como rehenes a los guardias republicanos Luis Mayta Calderón, Gregorio Sobrevilla Herrera y Luis Pérez Elez. Intentan retener también al agente penitenciario José Luis Casas Sandoval, quien logra huir. Los amotinados atacaron con chavetas y verdugillos a los policías, logrando apoderarse de tres fusiles automáticos con cacerina y de una pistola ametralladora.

7.30 a.m. El director del Penal "San Juan Bautista", José Rojas Mar, es informado por mensaje radial.

9.30 a.m. El director del Penal llega al lugar de los hechos y se comunica con el Fiscal Provincial de Turno del Callao, el juez instructor de turno de esa provincia y con el juez de Ejecución Penal de El Frontón, a través de los oficios 329, 330 y 338 - 86-DIR-EPSJB.

10 a.m. Llegan a la isla 50 efectivos de la GR al mando de un capitán.

11 a.m.- Llegan 32 efectivos más de la GR al mando de un coronel. Por seguridad en el curso de la mañana los presos comunes fueron encerrados en el pabellón conocido como "El Chaparral"

1.50 p.m.- Desembarcan en El Frontón el fiscal Ismael Gutiérrez Vilchez (3ra Fiscalía Provincial de Turno del Callao) y el juez de Ejecución Penal, Juan de Dios Jiménez Morán.

2.30 p.m.- En un helicóptero de la FAP y acompañados por el general GR Harry Gago y el senador Andrés Quintana Gurt llegan los integrantes de la Comisión de Paz, Dres. Fernando Cabieses, Mario Samamé y César Rodríguez. Manifiestan estar ahí por iniciativa propia, pero con autorización del presidente Alan García.

2.40 p.m.- El director del Penal, el Fiscal Provincial, el juez de Ejecución Penal y el coronel GR Víctor de la Cruz, jefe del destacamento policial de la isla, firman un acta acordando la no intervención de efectivos policiales, el diálogo con los amotinados y el respeto a la integridad física de los delegados del Pabellón Azul que acudieran a dialogar.

2.50 p.m.- En el helicóptero FAI 2886 llegan el viceministro del Interior Agustín Mantilla, el subjefe militar de



Tres personas de una misma tragedia: los familiares de los detenidos asesinados, los helicópteros artillados de la Marina de Guerra que lanzaron rockets en El Frontón y los nichos de los entierros clandestinos.



Santa Bárbara

VICTIMAS INOCENTES

El primer operativo contra los amotinados se efectuó en el Penal de Santa Bárbara del Callao, donde 70 internos a las 6 de la mañana del miércoles tomaron el establecimiento capturando como rehenes a la directora María Acarazas, Margot Gonzales y Yolanda Reátegui, así como a otras tres empleadas, que horas más tarde lograron fugarse por el techo del vetusto local.

A las 20 horas llegaron efectivos de la GR, incluido un destacamento femenino fuertemente armado, los que media hora después iniciaron el ataque al Penal desde el techo. Según comunicado oficial sólo dos internas habrían muerto en el operativo, y seis más estarían heridas en el hospital de las Fuerzas Policiales.

Sin embargo, según algunas fuentes en ese nosocomio habrían sido

autopsiados entre 14 y 16 cuerpos, que mostraban heridas de bala en el tórax y vientre. Además estarían siendo atendidas diez mujeres con heridas graves. Esto se ve reforzado con el hecho que al Penal de Santa Mónica, Chorrillos, sólo han sido conducidas 54 inculpadas de terrorismo, pese a que sumaban 70 las internas en Santa Bárbara.

Beatriz Sarmiento Ramos era una profesora del distrito de Comas, a quien en una serie de atestados policiales de la DIRCOTE, los propios senderistas la habrían comprometido como represalia porque ella se separó de sus filas hace tiempo atrás.

Mabel Chávayra Loayza era una joven puneña que habría sido detenida por la policía en su ciudad natal tras denunciar públicamente que había sido violada por un miembro de la GC.

la Casa de Gobierno y cuatro reporteros de Canal 7.

3.30 p.m.- Acompañados por el director del Penal, los miembros de la Comisión de Paz se acercaron a la reja del Pabellón Azul y con un megáfono instaron a los internos a buscar una solución pacífica al conflicto.

3.40 p.m.- El director del Penal, el subdirector, y el jefe de seguridad ingresan al Pabellón Azul. Posteriormente entran el fiscal, el juez de Ejecución Penal y el senador Quintana. Hablan con los rehenes, quienes les informan haber sido curados por los internos. Los delegados Carlos Edmundo Ayala, José Armando Tulich Morales, Walter Chong Long Gasco, Víctor Manrique Olivares entregan a las autoridades un pliego petitorio con 26 puntos. Demandaban la formación de una comisión mixta integrada por familiares, abogados y autoridades. El Fiscal, el juez de Ejecución Penal y el senador expresan su conformidad y salen a cumplir con el encargo (conformar la comisión). Al salir, el viceministro del Interior Agustín Mantilla, les comunica que el control de la situación quedaba bajo responsabilidad del Comando Conjunto.

4.25 p.m.- El director del penal, José Rojas Mar, levanta un acta, suscrita por el Fiscal, el juez de Ejecución Penal y los miembros de la Comisión de Paz, dejando constancia de que él en ningún momento ordenó el ingreso de las fuerzas armadas al penal. En el documento se exime también de responsabilidad por las consecuencias de la incursión de efectivos de la Infantería de la Marina al Pabellón Azul, y manifiesta desconocer qué dispositivos autorizan esa medida. En ese momento se acerca un radiopéador de Establecimiento Penales, quien manifiesta haber recibido orden de su base de dejar la situación en manos del Comando Conjunto.

En las horas siguientes la Marina dispone que la GR preste apoyo y se ubique en el perímetro del penal, en los techos del destacamento GR y en los tanques de agua.

6 p.m. Empieza el tiroteo hacia el Pabellón Azul, que se prolonga por más o menos tres horas. Los reclusos cantaban himnos.

PLIEGO DE LOS AMOTINADOS EN EL FRONTÓN

Un pliego de reclamos, de 26 puntos, fue entregado por los internos del Pabellón Azul al director del Penal en la mañana del propio día miércoles 19, al fiscal provincial, y al senador Andrés Quintana, quienes accedieron a constituir una comisión mixta que se encargue de buscar solución a las demandas de los amotinados. Los siguientes son algunos de los puntos que consideramos importantes;

1. Respeto a las actas del 16 de julio y 31 de octubre de 1985, suscrita por los representantes del Ministerio de Justicia, INPE, Poder Judicial, de una parte, y de la otra estaban representantes de los presos especiales.

2.- Garantías contra el nuevo genocidio que trama el gobierno aprista, la Marina y demás reaccionarios contra los internos por terrorismo.

3.- No al traslado a provincias de los procesos judiciales de los presos especiales. Derogatoria del artículo segundo de la Ley 24499(*).

4. Aumento del socorro alimenticio a un mínimo de 15 intis diarios. Para todos los Penales se hará extensivo este beneficio.

5.- Destitución del presidente del INPE, Manuel Aquézo, por ser cómplice del genocidio del 4 de octubre de 1985 en Lurigancho.

6.- Entrega de los cadáveres de los asesinados el 4 de octubre de 1985 a sus familiares, dando cumplimiento a la resolución del Primer Tribunal Correccional de Lima del 9 de octubre de 1985.

7.- Traslado inmediato de los 16 internos por terrorismo en Canto Grande a los pabellones donde se en-

cuentran los presos especiales en Lurigancho o El Frontón.

8.- Cese de las amenazas, persecuciones y detenciones a los familiares de los presos especiales por parte de la Marina de Guerra, de DIRCOTE y del gobierno aprista.

9.- Aceleración de los juicios, por el respeto al derecho de la defensa.

10.- Erradicación de los basurales en Lurigancho.

11.- Suministro de luz las 24 horas del día en El Frontón

12.- Reparación del sistema de agua, desagüe y eléctrico en el Callao y Lurigancho.

13.- Contra las requisas, por ser masacres y robo para los internos.

14.- Suministro de medicinas para los internos que se encuentren enfermos. Evacuación a los hospitales de los enfermos, aumento del presupuesto para salud en un 10 por ciento.

15.- No a la intervención de la Marina en El Frontón; no a las revisiones humillantes a los familiares de los prisioneros de guerra por efectivos de la Marina.

16.- Por el cese de la nefasta política de los desaparecidos.

17.- Ninguna represalia contra los internos especiales ni contra sus familiares y abogados.

18.- Publicación de estos acuerdos y de las actas del 16 de julio y 31 de octubre de 1985.

19.- Presencia de los periodistas a la suscripción de los acuerdos y en la ejecución de los mismos.

(*) Por la cual se traslada los juicios de los inculcados por terrorismo a sus lugares de origen. (N. de R.)

9 p.m.- Sale un interno del Pabellón Azul, de apellido Marín Guillén, de quien se dice que fue secretario de un juez en Huancavelica y era informante de las autoridades. Recibe atención médica, un oficial de la Marina lo interroga y se informa por él de la existencia de un subterráneo. Esto decide la variación de la táctica empleada por las tropas, que pasan a usar bazookas y morteros.

El tiroteo continúa durante las horas siguientes. Los tiros de bazooka abren un boquete. Los infantes pueden acercarse más y colocar cargas de dinamita en las paredes.

JUEVES 19

3 a.m.- Un grupo de 15 a 20 internos sale desarmado del Pabellón Azul, contra el que se había lanzado gases. Son ametrallados.

El ataque prosigue durante toda la madrugada.

7 a.m.- Entra en acción un helicóptero artillado de la Marina. Los amotinados responden al fuego. Es herido un infante.

7.30 a.m.- Es retirado del escenario un técnico de tercera, muerto. Aquí la

Marina de Guerra llama a la Base Naval de San Lorenzo para que manden médicos militares pues los heridos estaban siendo atendidos por médicos civiles.

11 a.m.- Otro oficial muerto es sacado del lugar (Una versión señala que el único oficial muerto por los internos fue un teniente, que recibió un balazo al acercarse al sótano para ayudar a un compañero herido. Los demás habrían muerto como consecuencia del fuego cruzado que efectuaron las tropas).

1 p.m.- Cesa resistencia de los acusados por terrorismo. Las balas se les han agotado y están sofocados por los gases.

2 p.m.- Entran los infantes al Pabellón Azul. Toman el sótano, rematan a los heridos y rescatan a dos guardias republicanos que estaban de rehenes. El tercero ha muerto asfixiado. Un pequeño grupo de internos es conducido hasta la cancha de fútbol, donde los obligan a tenderse.

2.30 p.m.- Llega un contingente de los infantes de marina a relevar a los primeros.

Jueves, 3 p.m.- El operativo ha terminado.



LURIGANCHO

TIEMPO DE MORIR

1.00 Los trabajadores penitenciarios inician su paralización indefinida, por acuerdo del Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios (SINATRAP). Reclaman aumento de pago por Riesgo de Vida, refrigerio y movilidad. Sin embargo, continúan laborando los agentes de servicio en el penal.

5.55 En la zona conocida como Siberia, donde confluyen las puertas de las rejas que dan a varios pabellones, varios internos se acercan a la puerta que da al pabellón Industrial y le solicitan al agente José Suárez Orihuela que abra la puerta para conducir al tóxico a un supuesto enfermo que agoniza. El vigilante es sorprendido y tomado como rehén.

6.15 Los vigilantes se dan cuenta de la desaparición de su compañero al cambiar de turno. El hecho es comunicado al director y funcionarios del INPE.

7.00 Los internos del pabellón Industrial comunican a los vigilantes que tienen como rehén a Suárez Orihuela.

9.00 Los internos de los pabellones de comunes y presos políticos trepan a los techos de las celdas para reclamar se dé paso a la visita de sus familiares, que había sido suspendida por orden del presidente del INPE, Manuel Aquézo.

10.00 Se hacen presente en el lugar el juez de ejecución penal y el Fiscal de la 39 Fiscalía Provincial para conocer la situación. Los amotinados muestran al rehén y reiteran sus condiciones.

10.30 Los magistrados comunican la situación al Ministerio de Justicia, pero no llega ninguna respuesta. En el interior del penal se producen algunas reyertas de los internos comunes con los vigilantes.

11.40 Crece la protesta dentro y fuera del penal. Las visitas se enfrentan a empleados del mismo. Se extrae del interior, en una camilla, al agente Luis Camargo, golpeado por comunes; es conducido en una camilla al hospital 2 de Mayo. Adentro se escuchan disparos de escopeta y una explosión pequeña.

11.52. Arriban la Juez Instructor Isabel Marín y la abogada Martha Huatay, defensora de acusados por terrorismo. Pasan a Lurigancho para dialogar con los amotinados.

12.00. Dirigentes del SINATRAP dan a conocer que ellos no se oponen a la realización de las visitas. Pero que, ante la negativa de Aquézo, procederán a entregar las llaves de la prisión y harán abandono de la misma en presencia del juez y fiscal cuando regresen. Dan cuenta que el rehén Suárez está bien.

14.30. Llegan efectivos de la USE y un rochabús para controlar a los familiares, dispersándolos una hora más tarde. Los empleados y el Director desconocen aún las medidas acordadas por el Presidente de la República y el Consejo de Ministros autorizando el ingreso de militares a las prisiones.

15.40. Salen del penal la juez Marín y la abogada Huatay. Los familiares de los presos comunes intentan raptar a la primera, que tiene que ser rescatada por el rochabús.

16.00. Regresan el juez y el fiscal. Pero los agentes penitenciarios deciden no abandonar sus puestos. Ya se conoce lo dispuesto por el gobierno. Los magistrados intentan nuevamente convencer a los internos del pabellón Industrial para que entreguen al rehén.

20.00. Los trabajadores, conjunta-

A poco de iniciado el amotinamiento en los tres penales por los inculcados de terrorismo, los grandes medios de comunicación pusieron en práctica el tácito acuerdo de autocensura convenido con la Presidencia de la República. Desde entonces sólo existe una información monocorde y manipulada. Gracias a fuentes directas y al testimonio ofrecido por el agente penitenciario tomado como rehén por los rebeldes, se ha podido establecer la siguiente cronología de lo sucedido en el penal de San Pedro o Lurigancho.

mente con los dirigentes del SINATRAP, discuten y aprueban levantar el paro y facilitar así las negociaciones. Y le comunican en carta al presidente del INPE, recibida por el asesor, Dr. Carlos Salazar Romero.

20.30. Llegan 200 efectivos del Ejército y de los Llapan Atic, de la GR, al mando de dos generales. Uno de ellos, el general de Policía Máximo Martínez Lira. Rodean el penal.

22.00.- El juez y el Fiscal César Tirado, de la 39 Fiscalía Provincial, intentan nuevamente dialogar con los amotinados. Ante la decisión de los militares de intervenir, tanto los magistrados como el Director del penal levantan un acta eximiéndose de responsabilidad de lo que suceda con el operativo militar, dejando en claro que no hay dispositivos legales que autoricen el mismo. Del INPE se confirma que penales

pasan a jurisdicción del Comando Conjunto.

23.15. El Director gestiona ante los amotinados la mediación de un periodista (como había sucedido anteriormente). Un grupo de empleados intenta salir a buscar un periodista, pero son impedidos por el Gral. Martínez, que pistola en mano los amenaza.

24.00. Los efectivos de Llapan Atic ingresan por la puerta principal, los soldados por una puerta lateral. Los primeros se parapetan junto al hospital para pacientes tuberculosos en tanto los otros lo hacen en la parte posterior y lateral del pabellón Industrial.

JUEVES 19

1.00. Militares dan un plazo de 10 segundos para que empleados abandonen la zona. Un disparo de fusil da la señal de asalto. Sueltan las primeras ráfagas en forma alternada y fuego cru-

zado. Especialistas en demolición colocan diversas cargas y durante una hora se suceden las explosiones. Los internos mientras tanto continúan cantando la Internacional e himnos de Sendero Luminoso, así como lemas partidarios.

3.00. Los internos comienzan abandonar el pabellón con las manos en la nuca. Alrededor de sesenta internos que se entregan efectivos del Ejército por la parte lateral son eliminados. Los médicos del tóxico tratan de hablar con la Cruz Roja para dar a conocer los hechos, pero es cortada la comunicación telefónica con el exterior.

3.30. Sale un último grupo de internos, los acompaña el rehén Suárez Orihuela, quien es golpeado por los GR pese a que se identifica como empleado. Es rescatado por vigilantes que laboran en el tóxico. Se comprueba que la golpiza de los uniformados le ha causado la fractura de la mano derecha; además tiene un rozón de bala.

4.00. En el tóxico son atendidos 14 soldados con diversas heridas, que luego son trasladados a nosocomios militares. No se reporta ningún interno herido. A esta hora se da por terminado el operativo. Los soldados del Ejército se retiran, quedando sólo los Llapan Atic.

10.00.- En Palacio de Presidente García, y los ministros José Palomino y Luis Gonzales Posada firman el DS 203 -86 EF, con el cual exceptúan al INPE de la prohibición de aumentos y autorizan el reajuste de la remuneración por Riesgo de Vida, que es fijada en 400 íntis mensuales.

Testimonio de José Suárez Orihuela, rehén en Lurigancho

Yo estaba ese día de servicio a la altura de la Siberia, casi para acabar el turno (a las 6 a.m.). En esa zona hay cuatro rejas.

“Por la reja de la cocina apareció un interno todo apresurado: ‘Acá traemos a un enfermo que está agonizando. Así que, por favor, la puerta. ¡Se muere, se muere! Entonces yo vi que dos traían cargando a uno, con suero, así como estoy. Les dije: un momentito, no tengo la llave, le voy a comunicar a mis compañeros. Saqué mi llavero, pero no daba con la llave, tenía cinco. En ese plan estaba, cuando ellos abrieron la reja que da para la cocina. No sé si habrá estado junta nomás o ellos tenían llave. Sentí un pequeño forcejeo, un ratito nomás y ya estaban encima de mí. No pude avisar a mis compañeros.

“Los internos no tenían armas. Me dieron un par de golpes en la cabeza y me agarraron y me amarraron la boca primero y después me taparon los ojos. No sabía dónde me estaban llevando. Cuando llegamos me quitaron la venda. Vi que era un cuarto estrecho, bien angosto, cerrado con frazadas hasta el techo. Había una sola cama. Me dijeron: No te va a pasar nada. Tranquílicese, siéntese si gusta, puede estar echado, como guste. Nuestra lucha no es contra ustedes, porque simplemente eres un trabajador y nosotros estamos luchando contra el sistema, contra las autoridades, pero por las circunstancias del caso tú eres nuestro rehén en este momento. Vamos a curarte si tienes heridas. Te vamos a dar pastilla o cualquier cosita que necesites. Pide nada más, me dijo.

“Dos hacían guardia, con las caras cubiertas. Siempre estaban dos.

“En la noche me acosté para dormir un rato. En eso me dijeron: vamos a apagar la luz, parece que la Republicana está tomando posición, la cosa se agrava. No sé qué horas serían, quizá las 10, no sé.

“Ellos me decían: Nosotros estamos dispuestos a salir cadáveres de acá. No vamos a salir por las buenas, pero te vamos a cuidar, vamos a proteger tu vida hasta el final, si es posible vamos a entregar nuestras vidas por salvarte.

“Después me dijeron: vas a avanzar con nosotros. Antes que comenzara el tiroteo, faltarían 10 minutos ó 15. Me sacaron del cuarto. Me tenían agarrado por lo menos tres. Me jalaban de un lado a otro, siempre vendado. En eso empezaron los primeros disparos, las granadas, o explosivos, todo eso. Estábamos tirados a ras de suelo. Yo estaba rodeado por ellos. Decían acá estamos en una zona que fácilmente nos puede caer una bala, vamos para otro lado.

“Las lunas volaban en pedazos. Las esquirlas saltaban seguiditas. Estaban (los soldados) tranquilos un ratito y después nuevamente tiraban. Uno de los internos gritó: ¿alguien tiene un pañuelo para tapar la herida que le han abierto en la frente a un compañero? Era cerca.

“De repente dijeron: casi somos los últimos, los otros ya han salido con las manos en la nuca, ya no queda nada que hacer. Empleado (a Suárez) ya vamos a salir, póngase la mano a la nuca y trate de avanzar a como dé lugar.

“Uno que estaba a mi lado, casi por encima mío pasó. En ese momento me soltaron y yo también salí así, con la venda todavía. Me tropezaba, me levan-

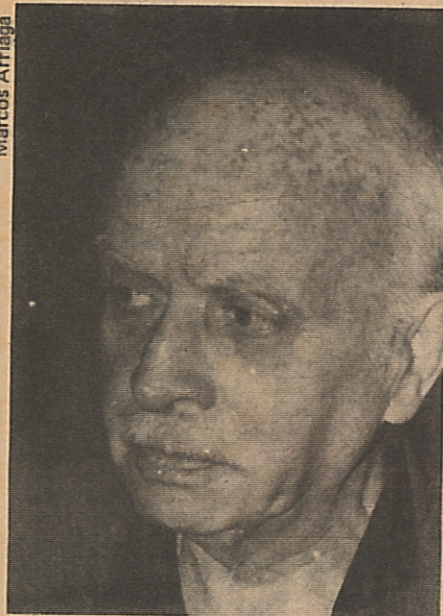
taba escuchando más o menos la voz que me decía: salga, salga. Y así avanzaba, cayéndome.

“Estaba cerca de la puerta cuando me jaló, seguro era un republicano. Hasta ese momento yo prácticamente no tenía nada, sólo una herida en la mano, quizá causada por un rozón de bala o perdigón. La puerta era una abertura que habían hecho, donde había tierra y ladrillo. Allí me empezó pues los golpes, los patadones, varazos, de todo. Me caía, me levantaba, seguía avanzando.

Yo gritaba: soy el empleado, soy el rehén. ‘Cállate’ me gritaban. Me mentaban la madre. En eso un republicano alto me pidió el carnet. Yo le dije: a mí me han tomado como rehén, me han quitado mis cosas. El respondió: ‘Ah, eres el rehén, sácate la casaca y tápate la cara’.

“Hasta ese momento estaba viendo que había internos en el suelo, no sé cuántos estaban tirados con las manos en la nuca. No sé si estaban vivos o muertos. No llegué a diferenciar. Era como salir de un sueño, yo creía que no iba a sobrevivir. Me agarraron dos republicanos y me cachetearon, me llevaban no sé a dónde. Una voz decía: ‘llévalo a la Alcaldía para que lo reconozcan’.

Creo que me llevaban hacia allá, no sé. En eso sentí la voz de un compañero de trabajo que gritaba: ‘no maten a nuestro compañero’. Los republicanos me jalaban y me llevaron al tóxico. No sé qué hora era. Creo que me desmayé. Después me trajeron acá al hospital (Rebagliatti).”



Jorge del Prado



Antonio Cisneros



César Barrera Bazán



Alberto Flores Galindo

POLITICOS E INTELECTUALES CONDENAN LA MASACRE

JORGE DEL PRADO
Secretario general del Partido
Comunista Peruano

Nosotros, como los demás partidos de IU, hemos hecho conocer nuestra protesta por el genocidio. Nuevas informaciones no tenemos, aparte de lo que los periódicos han publicado. Sin embargo, he recibido la visita de la hermana de Antonio Díaz Martínez, un sobrino de este último, familiares de Arturo Morote y de Arévalo, que fue compañero de mi hijo en el colegio Guadalupe. Y su testimonio nos ha colmado de indignación. Porque se ha cometido un crimen sádico y una venganza ideológica con estas tres personas. A Antonio Díaz Martínez lo han separado del grupo, acusándolo de ideólogo, y lo han acorralado inmisericordemente.

A Arévalo, que era un hombre lisiado por una lesión en la columna y por lo mismo totalmente indefenso, lo han masacrado pese a que nunca se pudo probar su pertenencia a Sendero Luminoso. Igual hicieron con Arturo Morote.

Yo quiero decir que, más allá de las diferencias ideológicas que pudiéramos tener, no podemos permitir que se cometa un genocidio. Quiero reiterar mi indignación como senador, como luchador social más allá de las diferencias...

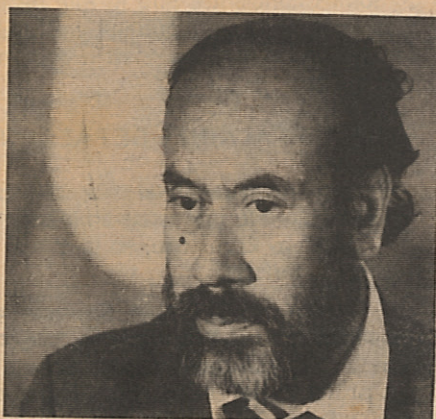
Esto es la pentagonización del país; es el avance del Pentágono, de la guerra sucia, de la estrategia de la "seguridad nacional."

Quiero dejar sentada mi protesta y una vez más mi indignación por esta barbarie, porque ésta es una cuestión de principios... y también de sentimientos...

ANTONIO CISNEROS

Hace poco, comentando la censura del Comando Conjunto sobre Micky Gonzales y otros rockeros, dije que las Fuerzas Armadas no podían pretender ser bomberos y, en la práctica, convertirse en incendiarios al mismo tiempo.

Los últimos sucesos de las prisiones



Genaro Ledesma

me han dejado sin aliento. Sea cual sea la condición de los terroristas, nada justifica tal barbarie. Por otro lado, no me siento en absoluto dispuesto a aceptar las explicaciones y comunicados oficiales. Pues el Comando Militar no ha permitido el menor resquicio de libertad a los medios de prensa.

CESAR BARRERA BAZAN
Diputado UNIR

Es un acto genocida. Ese es su nombre propio. No hay ninguna explicación que pueda justificar una masacre de estas características. Sólo tiene parangón con lo que acostumbraban las hordas hitlerianas. Por más esfuerzos que se haga para justificar este abuso que linda con el salvajismo jamás podrán convencer a la opinión pública nacional e internacional que los internos, que suman centenares, han sido muertos como consecuencia de un hecho de guerra.

Estos hechos deteriorarán sin duda la imagen democrática y de defensa de los derechos humanos que ha venido vendiendo el gobierno aprista, responsable directo de estas masacres.

Asimismo, queda demostrado que las Fuerzas Armadas y los sectores fascistas han impuesto el Norte de las acciones principales.

ALBERTO FLORES GALINDO

Me parece que el gobierno argu-



Rolando Ames

mentaba que en el Perú no habían presos políticos... ahora no hay. Sin negar que lo más grave son las muertes, lo que ahora viene es la cimentación de un modelo arbitrario que funciona en la lógica más que de represión, de exterminio. Esta lógica que ahora se ha expresado en la muerte masiva de presos puede llegar a exterminar lo que considera el caldo de cultivo de la subversión, que para ellos no es la miseria sino las ideas extrañas, y esto es una amenaza a todo pensamiento crítico o disidente. La prueba es que junto con esto ha habido censura de prensa; los periódicos están parametrados como bajo una dictadura. El poder civil ha abdicado ante los militares. Hay una opción consciente por parte del gobierno a favor de lo que se ha hecho. No es que no hubiera otra posibilidad; no se ha querido el diálogo; ni siquiera se ha informado los objetivos de los amotinados; sólo se ha querido el exterminio...

GENARO LEDESMA IZQUIETA
Senador (FOCEP)

El gobierno ha cometido una de las más terribles masacres que se recuerden en el Perú. Si los presos políticos encarcelados por terrorismo se alzaron en los penales de Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara existían métodos reductores sin apelar a las armas, métodos inteligentes para evitar la muerte de personas. En todo caso si los internos recurren a la vio-

lencia están los gases paralizantes, que se usan en estos casos. Pero hacer que intervengan las Fuerzas Armadas es un despropósito. Además el amotinamiento es parte de la vida carcelaria del país. Pero no darse una matanza de esta naturaleza. El PAP se mancha de sangre. No hay justificación para esta masacre.

El terrorismo se ha articulado. No ha sucumbido. Al contrario, de ahora en adelante vamos a ver actos de mayor violencia. Van a correr en el Perú, lamentablemente, torrentes de sangre. Frente a estos hechos, la izquierda peruana debe tomar las medidas para rectificar programas y métodos de lucha para salvar al Perú de la entronización del fascismo.

ROLANDO AMES
(Independiente IU)

Creo que se ha producido una violencia mortal e injustificada con la acción de las Fuerzas Armadas dentro de los penales. Creo que el amotinamiento de los presos, que tenían reclamos que pudieron ser injustificados, no significaba en ningún momento peligro para el penal y menos para los rehenes. No se explica por qué los rehenes salen vivos y el 900/o de los presos son muertos.

Exijo una Comisión Multipartidaria con plenos poderes, ya que no podemos aceptar que en un pequeño sector que ha sido declarado zona militar no quepa la participación de civiles como parlamentarios, la Iglesia, etc. Es indispensable una sanción a los culpables del develamiento del motín. Evidentemente que discrepamos con Sendero, pero la estrategia para combatirlo es política y no militar. Yo creo que el gobierno ha optado por la estrategia militar y totalitaria y que resulta una amenaza para la democracia civil del Perú.

CARLOS FRANCO

Prefiero no opinar, no he pensado al respecto... estoy viendo qué ha pasado... prefiero no opinar por el momento... le ruego me disculpe.



Partido Unificado Mariateguista



TRAGICA DECISION, SR. PRESIDENTE

NO A LA PAZ DE LOS CEMENTERIOS

No menos de 300 presos han muerto o desaparecido en las últimas 48 horas. Los informes oficiales hablan de 2 casos en la Cárcel del Callao, 124 en Lurigancho y otros 30 en El Frontón, sin dar cuenta de alrededor de 150 desaparecidos. Son cifras "oficiales". Por lo menos en lo que respecta a El Frontón, testimonios no comprometidos con los responsables del genocidio denuncian que hasta el momento se habrían encontrado 138 cadáveres. La verdadera magnitud del genocidio está aún por conocerse.

Se ha argumentado que ello era indispensable para hacer respetar el principio de autoridad, reimplantar el orden y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

El PUM sostiene, contrariamente a esta justificación, que estos hechos no hacen sino alimentar la espiral violentista, acentuar la militarización del país y del gobierno y abrir una gravísima situación política. Y vamos a fundamentar por qué.

LOS HECHOS

El miércoles 18, en el contexto de una paralización de los trabajadores penitenciarios, se produjeron disturbios en varios penales de Lima. Sectores acusados de terrorismo aprovecharon esta situación para capturar rehenes y llevar al gobierno a reconocerlos como presos de guerra, a ratificar el compromiso de las autoridades penitenciarias de no ser trasladados al penal de Canto Grande y a aceptar diversas demandas en relación a sus condiciones de detención. Su evaluación, seguramente, consideraba que el gobierno negociaría dado el Congreso de la Internacional Socialista en la capital.

El gobierno no negoció. Entregó el manejo de la situación al Comando Conjunto de las FF.AA. y comprometió a la "Comisión de Paz" y al Fiscal de la Nación para pretender que había intentado dialogar.

En el Callao, las internas entregaron un petitorio que no recibió otra respuesta que la intervención militar. En Lurigancho, la "Comisión de Paz" ni siquiera ingresó antes de la bárbara represión que segó la vida a cerca del 90 o/o de los reclusos inculcados de terrorismo del Pabellón Industrial. Más aún: existen denuncias que sostienen que a las 3.30 a.m. los reclusos entregaron al rehén que tenían en su poder y que a las 4.30 a.m. 60 de ellos se entregaron, siendo fusilados en el acto por los destacamentos del ejército y de la GR encargados de la represión.

En el Frontón, la "Comisión de Paz" y el Fiscal acudieron con la finalidad exclusiva de aparecer mediando ante las cámaras de televisión, retirándose en pocos minutos y sin negociar nada. Su retiro permitió que se lanzara una ofensiva militar con explosivos, armas de fuego y apoyo aéreo que ha dejado en escombros el pabellón en que se encontraban los presos.

Ahora los penales han sido declarados zonas militares restringidas, medida anticonstitucional que pretende evitar el esclarecimiento de lo ocurrido.

¿A DONDE VAMOS?

¿Pacifica el país esta acción? ¿Restablece el orden en los penales? ¿Resguarda la seguridad de la ciudadanía? No. La orden del Presidente de la República para que las FF.AA. procedan de esta manera no contribuye a la paz ni a la estabilidad de su propio gobierno.

Al contrario: se ha alimentado la espiral de violencia. Por un lado, Sendero Luminoso justificará nuevos atentados y asesinatos selectivos. Por el otro, la militarización del régimen y del país se acelera. El pacto Gobierno Aprista-Comando Militar se consolida y el peso del militarismo se acrecienta.

No olvidemos que en su primer comunicado el gobierno vinculó a los gremios y sus reivindicaciones (en clara alusión al SUTEP) con la escalada terrorista. Con ello no hizo sino reiterar su campaña contra la subversión "armada", "sindical" y su "brazo legal", la oposición de izquierda.

El evidente control de la TV y de la prensa en general, la confiscación de ejemplares de El Nuevo Diario en diversos lugares y las acciones contra semanarios de izquierda la noche del 18 no hacen sino revelar lo que nos anuncia el futuro: un parametrage y control mucho más rígido que en el período

militar.

Por esta vía, la ciudadanía no recuperará seguridad ni el país logrará la paz. De la misma manera como el estado de emergencia y los comandos político-militares no le han legado al país la paz, sino 7,500 muertos y más de 2,000 detenidos-desaparecidos en 3 años, este bárbaro accionar en los penales no hará sino enconar los odios y los afanes de venganza.

Finalmente, la alianza del gobierno con el Comando Militar no garantiza tampoco la vigencia del régimen. Conforme se deteriore, avanzarán las maniobras del reloj que marquen la hora del golpismo.

Por ello, las declaraciones que han respaldado "el afán gubernamental de imponer el orden en los penales" a sabiendas de lo que ello implica, no hacen sino confundir a la opinión pública y avalar un comportamiento que nos hunde cada vez más en la violencia.

Somos concientes que lo que decimos va ahora "contra la corriente" de sectores de la opinión pública, confundidos por la manipulación de los medios de comunicación. Pero nuestro compromiso es con la verdad, no con la fácil popularidad.

ACUERDO NACIONAL DE PAZ CON JUSTICIA SOCIAL

La encrucijada actual sólo será resuelta con la decisiva participación del pueblo. No hay salida en la polarización gobierno aprista-FF.AA. versus Sendero Luminoso, en la que el pueblo es un elemento pasivo, masa de maniobra, o víctima.

El PUM reitera, por eso, su voluntad de trabajar por un Acuerdo Nacional por Paz con Justicia Social que congregue a las más amplias fuerzas democráticas, a las organizaciones populares y gremiales, a los municipios, a los colegios profesionales, a las instituciones identificadas con los destinos de los pobres, a las personalidades progresistas, para poner fin al baño de sangre que enluta al país y acabar con el autoritarismo, la militarización y el terrorismo, banderas que inscribimos en la lucha por transformar un país donde la violencia cotidiana del atraso y la opresión sirven de telón de fondo al violentismo, a la guerra sucia y al terror.

El papel de la Iglesia es crucial, para abrir los canales de diálogo y garantizar los espacios de vida democrática del país, insertándose el ayuno del martes 24 en este esfuerzo. Por nuestra parte mantenemos, frente al autoritarismo y la intransigencia gubernamental, la voluntad de diálogo en aras de encontrar los caminos de un Acuerdo Nacional de Paz con Justicia Social que signifique:

1. Por la afirmación de la vida: contra todo terrorismo y la pena de muerte. Fin a la militarización.
2. Por el respeto a la autonomía y unidad de las organizaciones populares y por la defensa de los derechos humanos.
3. Por el levantamiento del estado de emergencia y el toque de queda.
4. Por bienestar popular, respeto a los derechos de los trabajadores y solución a las demandas regionales (Cusco, Puno y otras).

En relación a los condenables sucesos que denunciarnos, el PUM llama al pueblo peruano a movilizarse y exigir:

1. La investigación a fondo de lo ocurrido, a cargo de las organizaciones de derechos humanos, de personalidades independientes y de la Iglesia.
2. La sanción ejemplar a los responsables del genocidio.
3. La intervención inmediata de la Cruz Roja Internacional.
4. Garantías para la vida y la seguridad de todos los detenidos y de los presos políticos de IU.
5. La conformación de una auténtica Comisión de Paz, al margen de los manejos oficiales e integrada por reconocidas personalidades y representantes de las fuerzas que buscan la paz.
6. El cese del parametrage a los medios de comunicación.

Finalmente, el PUM expresa su apoyo al impulso que distintas organizaciones vienen dando a la realización del Encuentro Nacional Popular, medida de unificación de esfuerzos indispensable para hacer frente a la grave situación actual.

Javier Díez Canseco
Secretario General.

COMITE EJECUTIVO NACIONAL
20/VI/86.